



Los trasvases de agua del Júcar y del Tajo a la provincia son los únicos cuestionados en España. | RAFA ARJONES

La guerra del agua les estalla tanto a Puig como a Mazón

La negativa del «lobby» del agua en la Ribera del Júcar a que Alicante reciba caudal de calidad en favor de la Albufera condiciona la estrategia hídrica de los grandes aspirantes a la Presidencia del Consell

1

F. J. Benito

05·02·22 | 19:36 | **Actualizado a las 21:50**

Quién habrá sido el cerebro de la maniobra para que los regantes del Júcar cambien en tres años de criterio y traicionen a sus compañeros de Alicante? Es decir, para que pasen de apoyar sin fisuras en 2018 que Alicante recibiera parte del agua ahorrada por la modernización de sus regadíos a negarse soltar una gota y que toda se vaya a la Albufera. Han pasado 17 años desde que, en 2005, al fin, parecía que el trasvase del agua del Júcar a la provincia de Alicante iba a ser una realidad tras la aprobación del proyecto. El entonces conseller de Infraestructuras, **José Ramón García Antón** (soy de los que piensa que aquel triste 11 de agosto de 2009 en el que se fue la provincia de Alicante empezó a perder un peso en València que no ha vuelto a recuperar), había conseguido sentar en una misma mesa al

Ministerio de Medio Ambiente y a los usuarios del agua (no solo son agricultores) del Vinalopó, L'Alacantí, Marina Baixa y la Ribera del Júcar para acordar el envío de hasta 80 hm³ del Júcar a Alicante. Parecía que sí, pero no ocurrió; y ahora volvemos a encontrarnos en las mismas.

Los agricultores de València aprovechan la debilidad del Consell en el problema hídrico para volver a plantarse y reabrir la guerra del agua al asegurar que todo el ahorro de la modernización de los regadíos valencianos, obras pagadas por todos los que vivimos en la Comunidad Valenciana, desde Vinaroz a Pilar de la Horadada, se quedará en la laguna de la Albufera.

Y se acabó. Cada uno barre para su casa y están en su derecho (o no) de querer, egoísmo e insolidaridad territorial aparte, intentar quedarse con toda el agua y todos los euros públicos que puedan. Lo que no es aceptable es que para ello se rompan las reglas del juego con el amparo y el estímulo del Gobierno y, por el momento, de un Consell que no solo no ha sabido defender el envío de agua del Júcar para Alicante, sino que ha allanado el paso adelante dado por los regantes valencianos en sus alegaciones al plan hidrológico del Júcar, firmadas por dos alicantinos en un papel que, por lo constatado, ni el presidente **Ximo Puig** ni la consellera **Mireia Mollà** leyeron, o no quisieron leer. Y todo, además, cuando el escenario se complica ahora por momentos con el levantamiento en armas de Villena, que amenaza con cerrar el grifo de los acuíferos desde los que todavía se extrae buena parte del agua que se consume, por ejemplo, en la costa de Alicante. Lo que ha dividido a la propia Junta Central. Un papelón para Ximo Puig, pero también para el presidente de la Diputación, el popular **Carlos Mazón**, flamante aspirante al trono del Consell, y que ahora va tener que sentarse y convencer a los regantes de la Acequia Real del Júcar. Un Mazón que, pese a no tener en su equipo a gente de la talla política y humana de García Antón para apoyarle, ha demostrado hasta ahora su defensa sin fisuras del agua para la provincia, pero que en su carrera hacia la Presidencia de la Generalitat va a tener que lidiar con el poderoso «lobby» de agua valenciano.

Hace unas semanas, cuando se conoció el aval oficial del Consell para que toda el agua ahorrada de la modernización de los regadíos se emplee en mantener el parque natural de la Albufera, produciéndose la consiguiente y lógica revuelta de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, Puig enviaba a la provincia al secretario autonómico de Agricultura, **Roger Llanes**, para tratar de calmar los ánimos de unos usuarios que están dispuestos a acabar en Bruselas. Llanes, al que le había caído el marrón de dar las

explicaciones, vino con la habitual lluvia de millones para las obras que permitirán repartir el agua desde Villena, pero sin aclarar ni el precio, ni la calidad. Es decir, para vender unas obras en las que el Consell se está gastando 180 millones de euros sin tener ni siquiera asegurado que el caudal. El agua sigue en el Júcar y ahí seguirá, como han dejado claro los agricultores valencianos, conscientes de que a su propia fuerza se suma el no tener enemigos de peso con los que medirse y que el árbitro esté en otras cosas.

Y si en el Júcar la cosa está que arde, en el Tajo-Segura sucede tres cuartas parte de lo mismo, pero peor. ¿O mejor? Afortunadamente, la naturaleza se ha aliado con la provincia y, pese al primer recorte del trasvase, el Tajo lleva suficiente agua como para que este no se active, al menos, hasta mayo, esquivando tener que recurrir al agua desalada y pagarla al precio del mejor cava. Pero esto se debe a una circunstancia casual. Al margen del caso que pueda hacer el Tribunal Supremo a los recursos del Consell, la Diputación y el Ayuntamiento de Orihuela contra los recortes, se ha constatado, negro sobre blanco, que la hoja de ruta del Gobierno no tiene marcha atrás: el clima cada vez más seco, Emiliano García Page -presidente de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es cerrar el acueducto- y la obsesión antitrasvasista de la vicepresidenta Teresa Ribera condenarán a la provincia. Ribera apoya una tarifa del agua desalada que multiplica, en principio, por cinco, la que pueden asumir los agricultores. Ojo, pues ellos son el 80% de los regantes de Alicante y Murcia. No hablamos de las grandes empresas agroalimentarias del Campo de Cartagena que sí podrán pagar el agua al precio que marque Acuamed. En juego está el futuro de miles de familias alicantinas cuya subsistencia depende del agua del Tajo.

Hablamos de hasta 50.000 trabajadores de muchos sectores que se verían arrastrados al desempleo porque con eso de la globalización los tomates se pueden comprar en Marruecos, las naranjas en Argentina y Sudáfrica, las chufas en Mali y los melones y las cebollas en Senegal. ¿Qué agricultor puede pagar el agua desalada a 0,8 euros/m³ y luego subsistir con los 15 céntimos que recibe por un kilo de naranjas? La subida de la tarifa eléctrica disparará el agua desalada para riego a 1,25 euros/m³ este año, condenando a la desaparición a miles de agricultores, según advierte el Sindicato de Regantes del Tajo Segura. Los regantes exigen a la vicepresidenta Teresa Ribera que entre a fondo en el tema y que aplique la Ley de Sequía, que posibilita subvencionar el precio del agua desalada y fijar un precio de 0,30 euros/m³. El presidente del Sindicato, **Lucas Jiménez**, ha llegado a acusar al Gobierno de reproducir los peores momentos del franquismo o el estalinismo. ¿Cómo? Imposición tras imposición y con tretas como obligar a las comunidades de regantes a que firmen acuerdos individuales para las concesiones del agua desalada y asustándoles con las previsiones de que el trasvase Tajo-Segura cada día podrá suministrar menos agua.

Postdata. La falta de agua no solo amenaza al sector primario. El turismo residencial se ha convertido, prácticamente y utilizando un símil bancario, en un sector «sistémico» (su eliminación afectaría al conjunto de la producción de la provincia) para la economía de la Costa Blanca, al mover hasta 2019 un total de 12.000 millones de euros al año, de los que seis mil millones corresponden al gasto de los extranjeros que tienen su segunda residencia en la provincia, y otros seis mil al movimiento económico de la compraventa de apartamentos, villas y chalets. La venta de viviendas a extranjeros y turistas españoles mantiene 96.000 empleos al año entre directos e indirectos, y se trata de una actividad que ayuda a la desestacionalización y concentraría el 60% del gasto turístico. No está mal recordar estos datos para ver si se enteran Gobierno y Consell. Es decir, el agua en Alicante no solo se necesita para mantener la huerta de Europa. Hay señales que apuntan a que avanzamos hacia un **nuevo ciclo de sequía y en Alicante todo son problemas y asignaturas pendientes.**